

EDITORIAL

Cuenta Pública presidencial: avances y tareas pendientes

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, presentó ayer en el Congreso la última Cuenta Pública de su mandato, y -como era de esperarse- el foco estuvo puesto en los hitos que para la actual administración representan avances significativos para el país. Pero esa narrativa, de la cual no se escapa ningún gobierno, suele chocar con las realidades a las que se ven enfrentados los habitantes especialmente de zonas como la nuestra, donde temas como la seguridad pública, desarrollo económico y la anhelada descentralización del país figuran al debe.

En ese escenario, uno de los ejes de la Cuenta Pública fue la seguridad ciudadana, calificada como la principal preocupación de los chilenos. Se argumentó el quiebre de la curva ascendente de homicidios y el aumento de recursos y dotación policial. Sin embargo, la sensación de inseguridad sigue siendo muy alta en nuestras comunidades, donde el crimen organizado (y las balaceras asociadas) y los atentados a faenas productivas (como los que afectaron a la Central Rucalhue y de faenas forestales en Mulchén) continúan golpeando la tranquilidad y contrastan con la argumentación de mejoras en los indicadores a nivel de Macrozona.

El jefe de Estado entregó cifras económicas calificadas como positivas, como la inflación a la baja, creación de empleo y la proyección de cambio en la curva de crecimiento. Sin embargo, aquello contrasta con las percepciones locales que inmediatamente se asocian a la falta de seguridad para invertir, el cierre de empresas emblemáticas como la Siderúrgica Huachipato y el riesgo

en que se encuentran rubros muy relevantes para Biobío como la pesca.

En materia de desarrollo regional es destacable el anuncio que se pondrá urgencia a la tramitación de la Ley de Regiones más Fuertes -ingresado al Congreso en mayo de 2023- y que busca avanzar en financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal regional. Con esta iniciativa se aspira a disminuir las brechas asociadas a ingresos, gasto e inversión frente a países desarrollados, avanzar en modernización del Estado y combinar mayores grados de autonomía fiscal con más y mejores mecanismos de transparencia. Sin embargo, su implementación efectiva y la real autonomía que podrá entregarse a los gobiernos regionales -instituciones fuertemente golpeadas en su imagen por el accionar de administraciones previas en ámbitos como el traspaso de recursos a fundaciones- sigue siendo una tarea de largo aliento.

Es evidente que la actual administración de Gobierno está en deuda en relación con contar con una agenda más contundente de grandes proyectos para las regiones del país, especialmente en el caso de Biobío, una de las zonas más relevantes desde el punto de vista de la cantidad de población e influencia económica y social en la zona sur del país. En ese contexto, el llamado es a retomar la búsqueda de consensos y avances en torno a una estrategia regional de desarrollo que resulte convocante y tome en cuenta las particularidades de las tres provincias que integran nuestra región.